

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.

**Vistos:**

En estos autos RIT T-146-2019, RUC 1940213061-2, del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, por sentencia de doce de febrero de dos mil veintiuno, se acogió la demanda subsidiaria declarativa de relación laboral, despido injustificado y nulo, y cobro de prestaciones adeudadas, deducida por doña Juana Eugenia Díaz Salinas en contra de la empresa Sociedad de Emergencia Móvil Integral SpA, rechazándola en todo lo demás.

La demandada presentó recurso de nulidad que fue desestimado por la Corte de Apelaciones de La Serena, mediante sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.

En contra de este fallo, la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia.

Se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos que se invocan como criterios de referencia.

**Segundo:** Que la materia de derecho propuesta, consiste en declarar que *“los incisos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo constituye una norma sancionatoria, de derecho estricto y, por tanto, de interpretación y aplicación restrictiva”*.

Para la recurrente, la nulidad del despido constituye una sanción que se aplica al empleador que retiene y se apropia de los montos que descuenta de las remuneraciones que paga al trabajador, por concepto de cotizaciones previsionales; en consecuencia, si la naturaleza de la relación laboral se discute en juicio y sólo es reconocida en la sentencia definitiva, se debe concluir que la demandada no pudo cumplir su rol de agente intermediario, considerando, en forma adicional, que su naturaleza punitiva impide extender su aplicación a casos no expresamente contenidos en la norma, razones por las que solicita la invalidación del fallo recurrido y se dicte el de reemplazo que indica.



**Tercero:** Que, en lo que se refiere a la materia de derecho propuesta, el fallo impugnado consideró que la aplicación de la nulidad del despido contenida en los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del ramo, exige el incumplimiento de la obligación del empleador de consignar oportunamente en los organismos previsionales las cotizaciones de seguridad social, tras descontarlas de las remuneraciones que paga a sus dependientes, por lo que se debe acoger si tales prestaciones se adeudan cuando decide su despido, por cuanto la sentencia que acoge la demanda es de naturaleza declarativa, ya que reconoce una situación preexistente, entendiendo que la obligación previsional descrita, se origina con la primera retribución solucionada por los servicios prestados, tal como fue resuelto en la instancia.

**Cuarto:** Que, para la procedencia del recurso de unificación, es requisito fundamental que existan distintas interpretaciones respecto de una misma materia de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se sostengan concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, que denoten una divergencia que esta Corte deba uniformar.

Por lo tanto, para dar lugar a este recurso, se requiere analizar si los hechos establecidos en el pronunciamiento reprochado, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados como objeto del arbitrio, son claramente homologables o asimilables con los contenidos en las sentencias que se incorporan al recurso para su contraste.

Así, la labor que corresponde a esta Corte, se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance de la norma que resuelve la controversia, cuando se enfrenta con una situación equivalente a la de un fallo anterior, resuelta en un sentido diverso, que dependerá del marco fáctico establecido en cada caso.

**Quinto:** Que, para confrontar el dictamen recurrido, la demandada presentó la sentencia dictada por esta Corte en los autos Rol N°36.601-2017, de 26 de marzo de 2018, que rechazó la acción de nulidad del despido presentada en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, no obstante el reconocimiento en la instancia de la relación laboral existente entre las partes, inicialmente de naturaleza estatutaria, por cuanto se trata de una sanción que se impone *“al empleador que al momento de la desvinculación del dependiente se encontraba en mora en el pago de las cotizaciones previsionales, cuyos montos descontó y retuvo de las remuneraciones respectivas sin enterarlos en los*



*organismos pertinentes”, inadmisible si es la sentencia la que declara la vinculación laboral entre las partes, puesto que la “aplicación de la sanción de invalidez del despido debe determinarse a la luz de la finalidad que tuvo el legislador al instaurarla, que es precisamente estimular al empleador a enterar en los órganos respectivos las cotizaciones que retuvo, sin que sea necesaria la intervención de la autoridad administrativa o judicial, ergo, supone que esa obligación de retención es manifiesta para las partes”; de este modo, “si dicha obligación no resulta patente para un litigante que desconoce la existencia de la relación laboral, controversia que solo fue dirimida en la sentencia que se impugna, aplicar la sanción de la nulidad del despido en ese caso importa extender la finalidad de la norma más allá de lo querido por el legislador, con ello, obligar al empleador a asumir una actitud que de buena fe estima que no le es exigible, por ley ni por contrato, lo que también entendió el trabajador, según denota su actitud conforme durante toda la vigencia de la relación laboral”, concluyendo que “el reproche a que se hace referencia solo fue previsto para el empleador que efectuó la retención correspondiente de las remuneraciones del dependiente y no enteró los fondos en el órgano respectivo, es decir, no cumple su rol de agente intermediario y distrae dineros que no le pertenecen en fines distintos a aquellos para los que fueron retenidos, cuyo no es el caso, porque la demandada desconoció que el vínculo que lo unía al demandante era laboral, polémica que se dilucidó en la sentencia refutada, de modo que no hubo retención de cotizaciones en los organismos de seguridad social y, por ende, no procede decretar la nulidad del despido prevista en la norma transcrita”.*

**Sexto:** Que la sentencia acompañada por la recurrente, contiene una particularidad que la diferencia del dictamen impugnado y que impide realizar la labor de comparación que es propia de este arbitrio, por cuanto declara improcedente la nulidad del despido cuando la acción se dirige en contra de una repartición pública, puesto que, en tal caso, la vinculación a honorarios de una persona natural con la Administración, cuenta, *prima facie*, con una presunción de legalidad, por estar permitida, principalmente, en los artículos 11 de la Ley N°18.834 y 4 de la Ley N°18.883, cualidad que excluye la idea de simulación o fraude del empleador que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, conducta elusiva concurrente en estos autos, conforme se acreditó, que justifica la aplicación de los efectos de la nulidad del despido, por haberse establecido que desde enero a marzo de 2018, la



demandante prestó servicios en forma subordinada y dependiente para la demandada, dándose relevancia a su ejecución práctica, sin atender a la forma y literalidad del acuerdo original, constatándose que aquella distinción, impide homologar ambos pronunciamientos, porque en el de cotejo, las disposiciones estatutarias condicionaron la interpretación y alcance del artículo 162 incisos quinto y séptimo del Código del Trabajo, normas que no son aplicables en estos autos.

**Séptimo:** Que, sin perjuicio de lo anterior, esta Corte considera que la decisión impugnada no incurre en los yerros denunciados, por cuanto los artículos 41 y 58 del Código del ramo, y 17 y 19 del Decreto Ley N°3.500, disponen que las cotizaciones de seguridad social gravan la totalidad de las contraprestaciones en dinero que se pagan al dependiente por causa del contrato de trabajo, que el empleador descuenta y entera en los organismos previsionales, ejerciendo la función de agente intermediario, desprendiéndose que la naturaleza imponible de sus remuneraciones, ha sido determinada por la ley, por lo que las solucionadas en la forma establecida en la instancia, no obstante su denominación como honorarios, siempre revistieron tal carácter, a las que el empleador debió aplicar las deducciones pertinentes, obligación que fue incumplida y que hace procedente su imposición, interpretación coherente con decisiones previas de este Tribunal, desarrollada, v.gr., en los autos Rol N° 5.376-18, 14.739-18, 1.864-19, 11.216-19, 23.296-19 y 92.014-20.

**Octavo:** Que, según lo expuesto, se observa que el fallo ofrecido para confrontar el impugnado, no permite realizar la labor de contraste que es propia de este arbitrio, advirtiéndose, además, que la sentencia impugnada hizo una acertada interpretación y aplicación de la normativa en estudio, por lo que no se configura la hipótesis prevista por el legislador para que esta Corte la invalide, debiendo desestimarse el intentado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la demandada en contra de la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena.

Regístrese y devuélvase.

N°39.638-2021.-



Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señoras Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., y los abogados integrantes señores Eduardo Morales R., y Gonzalo Ruz L. No firma el Ministro señor Simpertigue y el abogado integrante señor Morales, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.



PHCEXBTQHX

En Santiago, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

